

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, vencido el término de traslado establecido en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede a dictar la decisión correspondiente en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MARIA LIGIA MONTOYA DE FERNÁNDEZ contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. (Rad. No. 05001-31-05-013-2018-00487-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene a la administradora del régimen de ahorro individual demandada a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes a partir del 24 de marzo de 2005, fecha de fallecimiento de su hijo Juan Diego Fernández Montoya; los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; la indexación; y las costas del proceso (fl. 4).

Como sustento de sus pretensiones manifiesta como esenciales los siguientes hechos: su hijo Juan Diego Fernández Montoya, quien había nacido el 22 de

junio de 1966, falleció el 24 de marzo de 2005; para el momento del fallecimiento era soltero, no tenía descendencia y vivía con ella; precisa que para el tiempo del fallecimiento de su hijo disfrutaba y aún lo hace, de una pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, la cual es equivalente al salario mínimo; no obstante lo anterior, su hijo suministraba “todo lo que con su pensión no alcanzaba a cubrir”, como por ejemplo, servicios públicos, vestuario, recreación, medicamentos no cubiertos por el POS, etc.; no obstante tener otros hijos, estos tienen sus obligaciones propias; reclamó a la demandada la pensión, pero en su lugar le fueron entregados los saldos de su cuenta de ahorro, pues la dependencia económica no aparecía probada (fls. 1 a 3).

Porvenir S.A., como entidad demandada, dio respuesta oportuna al escrito inicial. Se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la fecha de fallecimiento del señor Juan Diego Fernández Montoya, su afiliación a la entidad, la reclamación que se le formuló y la respuesta brindada, y la entrega de los saldos de la cuenta de ahorro individual del fallecido por valor de \$17.785.875. Formuló como excepciones las que denominó falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, compensación y prescripción (fls. 94 y ss.).

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 22 de agosto de 2019, absolvió a Porvenir S.A. de todas las pretensiones de la demanda, y le impuso las costas de la instancia a la demandante, fijando como agencias en derecho la suma de \$828.116.00. Básicamente sustentó su decisión en una falta de acreditación de la dependencia económica, requisito indispensable para el otorgamiento de este beneficio de la seguridad social.

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación el apoderado de la parte demandante. Pretende con este medio que se revoque lo decidido y, en su lugar, se reconozca la pensión pedida y demás pretensiones consecuenciales. Luego de no compartir las valoraciones de la a quo a la

prueba testimonial recaudada, así como a los dichos de la demandante en el interrogatorio de parte que se le formuló, considera que en el contexto de los hechos, la dependencia económica si aparece debidamente acreditada (audio digital, tiempo 1:40:55 y ss.).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

La Sala circunscribirá su estudio a los ítems objeto de apelación planteados por el apoderado recurrente, al tenor de lo normado en el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, los cuales se circunscriben a determinar si a la demandante le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes que deprecia con ocasión de la muerte de su hijo Juan Diego Fernández Montoya, y más específicamente desde el requisito de la dependencia económica.

Previo a abordar el problema jurídico anterior, es preciso dejar en claro que en el proceso aparecen debidamente acreditados los siguientes hechos: i) Que el señor Juan Diego Fernández Montoya es hijo de la demandante (fl. 18); ii) que este falleció el 24 de marzo de 2005 (fl. 19); iii) que para este momento se encontraba afiliado a la administradora demandada, Porvenir S.A., y que reunía el número de semanas necesario para generar la pensión de sobrevivientes (fls. 117 y ss.); y iv) que Porvenir S.A. le negó la pensión de sobrevivientes por ausencia de acreditación del requisito de la dependencia económica (fls. 133 a 134).

Ahora bien, acorde con la fecha de fallecimiento del afiliado, la normatividad aplicable es la contenida en los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en concordancia con los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 1993, que disponen, ante la ausencia de cónyuge, compañera o hijos con derecho, que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los padres, siempre y cuando acrediten la dependencia económica. El artículo 13 referido, al regular los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, dice en la parte pertinente:

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente ... de este;

Como lo que aquí se discute, como ya quedó dicho, es la dependencia económica, es preciso rememorar que esta exigencia ha sido objeto de análisis y pronunciamiento en múltiples oportunidades por esta Sala de Decisión recurriéndose a la doctrina para establecer una aproximación a dicho concepto. Por ejemplo, Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho usual, T. III, Ed. Heliasta, 24 ed., pág. 88, dice que es ***“...la situación de las personas que por su edad, nexa parental o incapacidad obtienen la subsistencia cotidiana por el trabajo o dinero que reciben de otra...”***

Igualmente se ha dicho que por dependencia económica bien puede entenderse aquella situación en la cual una persona obtiene la satisfacción de sus necesidades básicas y fundamentales, es decir, su subsistencia esencial y digna, por la ayuda material y económica de otra. También se ha sostenido que para que se materialice esta dependencia es necesario que el presunto beneficiario acredite, entre otros requisitos, los siguientes:

1. Existencia real de la ayuda: Si el apoyo material o económico por parte del afiliado o del pensionado no se da, cualquiera que sea la razón, así potencialmente pueda exigirse, no se puede hablar de dependencia económica.

2. Oportunidad: Los hechos que dan pie a pensar en la existencia de una dependencia económica deben existir al momento de la muerte del afiliado o pensionado. Si ésta se dio en un pasado o está prometida para un futuro, tampoco puede hablarse de dependencia económica. También es claro que si el beneficiario adquirió capacidad económica con posterioridad al fallecimiento del afiliado o pensionado, el hecho no tiene entidad para romper el derecho. Y no la tiene, pudiendo llegar a tenerla, porque la ley así no lo establece.

3. Persistencia o continuidad: La subordinación material debe darse de manera constante y permanente. Las ayudas esporádicas, accidentales o irregulares, así sean cuantiosas o revistan alguna aparatosidad, como podría ocurrir cuando se dona una gran suma de dinero, un automóvil lujoso o una vivienda, desdibujan la dependencia económica. Por el contrario, en algunos casos, bastará acreditar la mera intención o vocación de cumplimiento de estas condiciones, como podría ser en aquellos eventos en que la relación familiar apenas comienza a consolidarse para estos efectos. Un ejemplo podría ser aquel en que un afiliado o pensionado que estando encargado del sostenimiento de su hermano recientemente inválido, fallece.

4. Entidad de la ayuda o suficiencia de la misma: Lo proporcionado debe tener importancia y significación para la vida del beneficiario, hasta el punto tal que pueda afirmarse que de su otorgamiento depende en forma razonable su subsistencia. Como consecuencia, todas aquellas ayudas que no apuntan a este fin, así sean significativas e importantes para la vida del eventual beneficiario, como podría ser la cancelación de la cuota mensual para el club social, el sostenimiento mecánico del automóvil o la entrega periódica de dinero para cancelar el valor de espectáculos culturales, no tienen entidad para generar dependencia económica. Precisamente por esto mismo, bien puede decirse que las meras colaboraciones o simples ayudas no tienen capacidad para dar lugar a que se hable de dependencia económica. Por el contrario, éstas, cuando provienen de personas diferentes al afiliado o pensionado,

tampoco tienen la capacidad para desnaturalizar una verdadera dependencia económica, como mucho menos la tienen hechos accidentales o de esporádica ocurrencia en la vida de un potencial beneficiario, como el laborar en cortos períodos o poseer pequeños ingresos. En sentido diametralmente opuesto, debe decirse que tampoco es necesario que estas ayudas sean totales o absolutas, es decir, que el beneficiario tenga que estar en situación de miseria o indigencia, como bien tuvo en precisarlo la Corte Constitucional en la Sentencia C-111 de 2006.

Así mismo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 19 de noviembre de 2013, radicación No. 44701, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve, se pronunció también al respecto, reprochando de igual forma el que se llegue a exigir que la dependencia económica sea total y absoluta:

“Esta Sala de la Corte en sentencia del 18 de mayo de 2005, reiteró lo adoctrinado de antaño en cuanto a que la ausencia de previsión legal que definiera el concepto de dependencia económica imponía que éste debiera ser entendido en su sentido natural y obvio, en el que depender significa estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una persona del auxilio o protección de otra.

En la providencia en precedencia, la Corporación enseñó que “en este preciso campo de la pensión de sobrevivientes la dependencia económica tiene el significado de subordinación o sujeción de los padres respecto de la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir. Discernida en ese sentido, la dependencia económica no se configura con una simple ayuda o colaboración que distingue la relación de los buenos hijos con sus padres”.

En ese horizonte, insistió la Corte que no es de recibo reclamar que “la dependencia de los padres en relación con el hijo, para que haga radicar en aquéllos el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de éste, sea absoluta, total o plena, que descarte cualquier otra fuente de ingresos de los progenitores, siempre que ésta no sea de tal entidad que los últimos pasen de subordinados a tener la suficiente solvencia económica que les permita atender por sí mismos sus necesidades”.

Y más recientemente en sentencia con radicado SL221-2021, en la que al respecto de la dependencia total y absoluta de los beneficiarios del causante fallecido señaló:

“La dependencia económica que permite a los eventuales beneficiarios acceder al derecho pensional no es la absoluta y total por la falta de ingresos; o que el beneficiario pensional se encuentre en estado de «pobreza extrema», por ser claro que, si existen otros ingresos adicionales permanentes o esporádicos, ello no significa, necesariamente, que la persona se convierta en autosuficiente económicamente, conclusión atinada a la que arribó el Tribunal.”

En la presente litis, sin dejar de destacar que las normas probatorias no exoneran a las partes de probar los hechos soporte de las normas jurídicas que invocan cuando ha transcurrido un período considerable de tiempo entre su ocurrencia y el momento en que se reclama el derecho, esta Sala de Decisión estima que no existe una prueba sólida, suficiente y contundente que acredite la dependencia económica de María Liga Montoya de Fernández por su hijo fallecido Juan Diego Fernández Montoya.

Y es que a no otra conclusión puede llegarse si se destaca que es la misma demandante, quien no obstante incurrir en lamentables contradicciones o deficiencias en los dichos que expuso en el interrogatorio de parte que se le formuló, en términos generales si da a entender que la pensión que recibía por la muerte de su cónyuge, le alcanzaba para satisfacer sus necesidades, siendo los aportes de su hijo una contribución necesaria y obvia por formar parte de la familia, pero no, se repite, para concluir que ella dependía económicamente de él. Textualmente quedó dicho:

“... con la plata de su pensión usted que pagaba? Los servicios, compraba todos los gastos de la alimentación, la casa es propia” (audio digital, tiempo 19:24 a 19:35).

A lo anterior debe agregarse que causa alguna perplejidad que la demandante ignorara el monto de su pensión, los ingresos o salarios de su hijo fallecido y la ayuda o colaboración que éste le proporcionaba, así como los gastos u obligaciones generales de su hijo. Súmese a lo anterior que vivían en casa propia, y que los testigos recibidos, Ligia Montoya Montoya y Margarita María Díaz Montoya, fueron claros en dar cuenta que los otros hijos de la demandante, también le colaboran para el cubrimiento de sus necesidades, sin precisar montos, o que esta última testigo declarara que la señora Montoya de Fernández mercaba, y que los gastos extras Juan Diego los complementaba, conducta muy ajena a la que se entiende por dependencia económica.

En conclusión, se comparte a plenitud la decisión de primer grado, pues no se advierte una prueba suficiente de la dependencia económica, motivo por el cual se habrá de confirmar la decisión en su integridad, incluido lo relativo a costas.

Dado que el recurso de apelación no prosperó, acorde con lo establecido en el artículo 365-1 del CGP, las costas de esta instancia estarán a cargo de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de medio SMLMV.

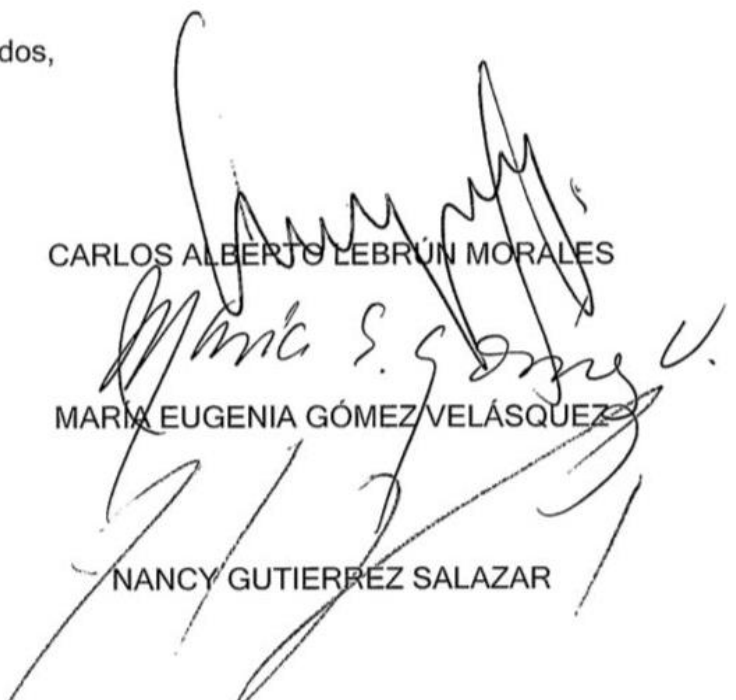
DECISIÓN

en mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, incluido lo relativo a las costas, en la forma y por las razones que quedaron descritas.

Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de medio salario mínimo legal mensual vigente.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

Maria E. Gómez Velásquez

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 117 fijados el 7 de julio de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario